

DEMOCRACIA Y DESMOVILIZACION POPULAR

David Ibarra
27 de febrero de 2004

En México, el ejercicio de la ciudadanía tenía y tiene escaso significado para grandes segmentos empobrecidos de la población. A principios de siglo, el desarrollo insatisfactorio de las instituciones, de la praxis y del pensamiento políticos junto al rezago educativo, pusieron el liderazgo del cambio revolucionario en manos de la movilización popular. Durante más de setenta años, las agrupaciones sindicales y gremiales fueron actores decisivos en el escenario político nacional. Los líderes obreros, campesinos y de la burocracia representaban la vanguardia de la Revolución, en tanto instrumentos de unión e impulso de las demandas populares. En más de un sentido podría afirmarse que las organizaciones de trabajadores fueron la espina dorsal del nuevo estado mexicano, llegando a desempeñar papeles que, en otros regímenes, corresponden a partidos y ciudadanos.

No es exacto que a partir de la fundación (1929) del Partido Nacional Revolucionario (antecedente del PRI), el corporativismo hubiese abolido los enfrentamientos con el poder público. Como lo atestigua el desmoronamiento paulatino de la Confederación Regional Obrera de México en los años treinta, afloran divisiones y conflictos entre gobierno y trabajadores, sobre todo durante la administración de Abelardo Rodríguez. Lombardo Toledano a la cabeza de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) alienta reivindicaciones laborales que desembocan en la creación (1936) de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como organismo unificador de muchos de los cuerpos laborales del país.

Aliados frente al callismo, Cárdenas y la CTM, inauguran una relación simbiótica que impulsa la fase de movilización de masas en respaldo a los gobiernos revolucionarios. Por esa vía, los trabajadores encuentran respuesta a sus demandas y los líderes alcanzan gravitación política. La solidaridad entre Estado y trabajadores permite satisfacer muchas de las metas del movimiento armado, consolidar el estado nacional, dar impulso al naciente nacionalismo patrio y constituir un partido hegemónico que arrasa en las urnas durante décadas.

De ahí en adelante, la simbiosis comienza a erosionarse gradualmente. La formación de élites económicas y políticas con visiones e intereses posrevolucionarios comienzan a transformar al corporativismo en instrumento de dominación de miras estrechas. El manejo gubernamental depende cada vez más de la pasividad de trabajadores y votantes.

A cambio, el régimen de derechos políticos se fortalece y se alienta con cierta determinación. El voto a la mujer, los legisladores de mayoría, la limpieza electoral y la separación de poderes, toman cuerpo, impulsando la modernización democrática. El sistema clientelar-corporativo cede poco a poco terreno a un electorado más libre, más inclinado a votar a favor de la libertad y del cambio.

En los años ochenta comienzan las primeras frustraciones transicionales cuando la democracia social, en oposición a la civil o política, queda en promesa relegada o incumplida. Las malentendidas exigencias de la globalización impiden a los ciudadanos elegir caminos más cercanos a sus preferencias y necesidades. Más aún, las élites criollas y las del exterior ven en la alternancia política, la vía de liberarse de la participación popular y de administrar al país

por medios distintos a la movilización ciudadana. En respuesta, los votantes tienden a desvanecerse, a ver con desencanto a la democracia. El abstencionismo en las elecciones de diputados federales sigue una espiral peligrosamente ascendente desde 1946.

El estancamiento de los últimos veinte años y desigualdades distributivas que se ahondan, vacían de contenido a la alternancia y desprestigian a los partidos políticos. A ello se suma el embate al nacionalismo y al presidencialismo que por diversas razones estorban a la libertad de mercados y a la modernización política, siendo ambos mal sustituidos por los nuevos nexos vertebradores de la sociedad mexicana: competitividad, eficiencia, derechos humanos universales.

En vez de alentar a ciudadanos preocupados por el bienestar nacional, se permite que se fraccionen y dividan. La élite económica nacional desaparece con celeridad, resultado de la extranjerización de las mejores empresas públicas y privadas que ahora responden a la lógica de los consorcios internacionales. Los ganadores de la transición son pocos, los perdedores forman la mayoría. Los grupos con intereses encontrados se reproducen de las más diversas maneras hasta hacer prevalecer el desacuerdo en torno a las políticas nacionales.

Pese a todas sus ventajas, la tecnología moderna facilita el aislamiento del votante. En reemplazo a la movilización popular impulsada por demandas colectivas y programas partidarios, hoy, las campañas electorales se hacen con dinero, en espectáculos televisivos o siguiendo encuestas que separan a los ciudadanos de sus congéneres y empobrecen la confrontación de ideas, propuestas, políticas.

En términos ideológicos, se descuida y hasta promueve la ruptura de la identificación asociativa entre soberanía popular y nacionalismo, viva desde la Guerra de Independencia. No se han querido ni sabido equilibrar las demandas de la democracia y el interés nacional, con las de los mercados liberalizados, adentro y afuera del país. Por eso, se avanza en crear las instituciones de la democracia formal, pero se reservan a cenáculos cerrados las políticas socioeconómicas ante el riesgo de que pudieran politizarse. Reaparece aquí, con vestimenta postmoderna, el infundado temor a una democracia fiel a la voluntad mayoritaria.

El epílogo es claro. La desconfianza entre gobierno y empresarios se hace evidente en la pobreza de la inversión privada de los últimos veinte años, pese a la enorme transferencia de poder entre Estado y mercado. Y otro tanto ocurre con los trabajadores. Los miembros de la CTM en ocasión de su Congreso Nacional (2004) despejaron cualquier duda sobre su rechazo a las políticas salariales y de empleo que privan en el país. En suma, la combinación de democracia formal y neoliberalismo no basta al propósito de impedir el divorcio entre sociedad y gobierno.